

Latinoamérica: la tierra bajo asedio

En los primeros días de julio se reunieron, en Lima, organizaciones que trabajan en la vigilancia de los derechos sobre la tierra en América Latina. Participaron representantes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua y Perú.



Foto: Caracol producciones

El aporte de cada uno de ellos fue vital para confirmar, en primer lugar, que en la región hay actualmente múltiples disputas por el control de la tierra, básicamente, entre elites y sectores vulnerables (pequeños agricultores, comunidades originarias, mujeres, etc.); en segundo lugar, que la cantidad de disputas va en ascenso; y en tercer lugar, que esas contiendas suelen resolverse, por lo general, a favor de los grupos de poder.

La tierra en América Latina está bajo asedio, entre otras razones, porque es la puerta de acceso para la explotación forestal, minera o de hidrocarburos; a ello se suma

que es, también, la principal fuente de alimentos para el planeta, que hay una gran expectativa de aprovechar el incremento constante del precio de los productos agrícolas y que el mercado de insumos para agrocombustibles tiene un gran potencial.

Tan variada y prometedora fuente de lucro ha despertado el interés de grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales, por controlar el espacio rural. Como en ese camino el principal obstáculo son las poblaciones rurales, el control que esperan conseguir estos grupos es fundamentalmente territorial, porque de ese modo tienen garantizado el dominio de la esfera

productiva, pero, además, un buen nivel de influencia en el ámbito del poder político-administrativo, principalmente en el que involucra la toma de decisiones.

La «cuestión agraria» en Latinoamérica, y también en continentes como Asia y África, ha pasado de tener una connotación fundamentalmente económica, a estar más relacionada, ahora, con el control del territorio.

Los siguientes recuadros sintetizan algunas de las manifestaciones más resalantes de la nueva cuestión agraria en Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala y Nicaragua.

Colombia:

Como consecuencia del conflicto armado, las comunidades rurales y los agricultores de este país han sido despojados de entre 2.5 y 10 millones de hectáreas, las que han pasado a manos de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Y aunque el actual gobierno ha anunciado un proceso de restitución, este sólo se hará sobre dos millones de hectáreas. Hoy, el despojo tiene su correlato legal en un modelo que privilegia proyectos agroindustriales, fundamentalmente, de siembra de palma aceitera, que necesita grandes extensiones de terrenos, lo que provoca el desplazamiento o confinamiento de las poblaciones rurales.

Bolivia:

Tras cinco años de gobierno, el presidente Evo Morales no ha podido modificar la estructura latifundiar del oriente del país. Hoy es perfectamente posible formar una sociedad agrícola de hasta cinco mil hectáreas por socio, sin límite de tamaño alguno.

La extranjerización de la propiedad rural, con activa participación de capitales brasileños, es otro proceso que asedia el espacio rural boliviano. La rentabilidad de la compra de tierras en este país es tan alta que, aun cuando de por medio no exista un título de propiedad, los inversionistas extranjeros estiman que vale la pena correr ese riesgo.

Ecuador:

La presión en el espacio rural ecuatoriano viene por el camino del mercado de tierras. No es posible pensar, allí, en un crecimiento de la frontera agrícola. Hay sólo 12 millones de hectáreas disponibles para la agricultura.

Con esa restricción y un escenario donde el 99.9% de las unidades productivas son menores de 600 hectáreas, y la mitad de todas las unidades son menores de 2.5 hectáreas, la expansión actual de cultivos como los de palma africana o caña no tiene otra explicación que el acaparamiento de esas unidades productivas por parte de importantes grupos económicos.

Venezuela:

En Venezuela, la «cuestión agraria» va más allá de los derechos de acceso, propiedad y uso de las tierras de uso agrícola: tiene que ver, fundamentalmente, con los bienes y servicios del ambiente, es decir, con la suma de tierra, agua, biodiversidad, etc.

A diferencia de otros países donde se busca expandir la frontera agrícola, en Venezuela ésta ha decrecido. Quienes poseen tierras no tienen garantía de que no les sea expropiada arbitrariamente, vale decir, confiscada, y además deben hacer frente a una economía dependiente de la renta petrolera, en detrimento de la seguridad y la soberanía alimentaria. No es posible hablar de soberanía alimentaria en un país en el que la mayoría de alimentos se importan.

Nicaragua:

En un escenario de liberalización comercial y de integración económica regional, al estilo de los tratados de libre comercio, coexisten en este país transnacionales que están monopolizando los mercados rurales, con sectores rurales pobres que no tienen medios para frenar su avance.

Más del 40% de familias rurales de Nicaragua no tienen acceso a la tierra; entre quienes tienen tierras hay menos de un tercio que las tienen legalizadas, y si hablamos de mujeres, solo un 18% son propietarias. No es de extrañar, entonces, por qué más del 70% de las tierras que hace algunos años fueron entregadas a campesinos, como producto de la reforma agraria, han pasado a grandes propietarios y, en menor medida, a algunos campesinos exitosos, ligados básicamente a la ganadería.

«La tierra en América Latina está bajo asedio, entre otras razones, porque es la puerta de acceso para la explotación forestal, minera o de hidrocarburos; a ello se suma que es, también, la principal fuente de alimentos para el planeta, que hay una gran expectativa de aprovechar el incremento constante del precio de los productos agrícolas y que el mercado de insumos para agrocombustibles tiene un gran potencial.»

Guatemala:

No solo el nivel de concentración de la propiedad rural es un asunto alarmante —menos del 3% de los productores manejan el 57% de la tierra del país—: también el arribo frecuente de inversionistas con megaproyectos mineros, hidroenergéticos y agrícolas ocasiona actualmente más de cinco mil conflictos en el medio rural guatemalteco.

La única respuesta del gobierno frente a demandas concretas de comunidades rurales es una política asistencialista. Hay una relación directa entre la promoción de megaproyectos de inversión y políticas de asistencia alimentaria y social dirigidas a los pobres rurales.

Foto: actualidadavipecuaria.com



Extensas áreas de tierra en América Latina están siendo sembradas con cultivos de soya.

Un breve repaso de los principales problemas de nuestros vecinos: despojo de tierras y desplazamiento de poblaciones en Colombia, persistencia de los latifundios en Bolivia, avance del mercado de tierras en Ecuador, menosprecio por la seguridad alimentaria en Venezuela, suscripción de acuerdos comerciales (TLC) desventajosos para el pequeño agricultor en Nicaragua y una escalada de conflictos rurales en Guatemala, nos hacen caer en la cuenta de que todos esos problemas, en mayor o menor medida, con actores comunes o particulares, afectan también al Perú.

No hace falta describir el problema de la tierra en el Perú; basta sintetizar los de los países vecinos para comprender que los nuestros son los problemas de América Latina. La tierra está bajo asedio y no respeta fronteras. ●